



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Víctor Eduardo Mesa Londoño
Demandado	Canaxia Labs S.A.S.
Radicado	05001 31 03 004 2022 00074 01
Procedencia	Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No. 017
Decisión	Confirma
Tema	<b>Proposición o requerimiento de prueba. C. General del Proceso.</b> Los aspectos que concitan la atención del Tribunal hacen relación con la capacidad y prerrogativa a la proposición o requerimiento de la prueba y el pronunciamiento sobre su admisibilidad, como se dijo en el texto traído como argumento de autoridad el problema jurídico queda delimitado en el primero de los momentos, que <i>“destaca la Corte Constitucional como contenido esencial del derecho a la prueba: la etapa o momento de la proposición o requerimiento de la prueba. De aquí la importancia de este ítem en cuanto a su cronología en el contexto del proceso, por ejemplo, el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la prueba no es posible sin el debido agotamiento de la etapa de proposición o requerimiento de la prueba”</i> .

2023-010

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante frente al auto del 14 de octubre último, proferido por el Juzgado

Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de esta ciudad, que negó el decreto de algunas pruebas solicitadas por dicha parte procesal.

## **I. ANTECEDENTES**

1. Víctor Eduardo Mesa Londoño presentó demanda ejecutiva en contra de la sociedad Canaxia Labs S.A.S. con fundamento en dos pagarés, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de esta ciudad.

Mediante auto del 14 de octubre pasado se decretaron las pruebas solicitadas por la parte demandante, excepto las que denominó “prueba por informes”, argumentando el *a quo*, que:

“NIEGA de conformidad con el artículo 173 inciso 2 del CGP, por cuanto dichas pruebas se hubiesen podido conseguir por medio de derecho de petición.

+DIAN para que certifique las deudas de la demandada con corte a 31 de diciembre de 2021 por valor de \$173,457,135 y \$1,361,400.

+CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN para que traslade documentos o actas en los cuales se soliciten anulación de actas por parte de la sociedad demandada durante toda su existencia comercial.”  
(Archivo 37)

2. Inconforme con la decisión el apoderado del accionante interpuso recurso de reposición, y apelación subsidiaria, indicando que el despacho debió tener en cuenta la necesidad de las pruebas aludidas, toda vez que surgen en virtud de las excepciones propuestas por la contraparte frente a unos títulos valores que se presumen válidos.

3. Desfavorable resultó la impugnación horizontal, pues consideró el *a quo* que de acuerdo con el numeral 2º del artículo 173 del C.

General del Proceso, esto es que, debió acreditar sumariamente que invocó el derecho de petición, para que con fundamento en él y acatando la norma citada, decretarla solicitando la información requerida, derecho de petición que no fue aportado.

## II. CONSIDERACIONES

1. El ordenamiento jurídico da especial importancia al derecho de probar, reconociendo a las partes de un proceso, el de *“presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra”* (inc. 4º, artículo 29 Constitución Política) e imponiéndoles la carga (*onus probandi*) de acreditar los supuestos fácticos de las normas jurídicas invocadas para deducir el bien controvertido (artículos 1757 Código Civil y 167 del Código General del Proceso).

Los medios probatorios se constituyen entonces como uno de los pilares esenciales para garantizar el acceso eficaz e idóneo a la administración de justicia, garantizar el debido proceso, la prevalencia del interés general y del derecho sustancial y, de manera especial, para solucionar los conflictos con justicia, además, el legislador, disciplina la búsqueda u obtención de la verdad real, material y objetiva en los asuntos confiados a la decisión judicial, cuanto compromiso ineludible del juzgador en el ejercicio de la jurisdicción (Sent. de 24 de noviembre de 1999; exp. 5339), dejando *“de ser un espectador del proceso para convertirse en su gran director, y a su vez, promotor de decisiones justas”* (Sent. de 7 de marzo de 1997, cas. civ. de 25 de febrero de 2002; exp. 6623) basadas en los preceptos normativos y en *“la verdad material enfrente de los intereses en pugna”* (CXCII, p. 233. cas. civ. de 24 de noviembre de 1999, exp. 5339).

2. La ley procesal otorga al juez la potestad para dirigir los procesos que están bajo su competencia, facultándolo para determinar si tiene o no en cuenta las solicitudes probatorias; en este sentido el juez tiene la autoridad de negar la práctica de una prueba ya sea por considerarla innecesaria, impertinente, ineficaz o inútil, o por no cumplir con los requisitos propios de cada medio de probatorio, potestad establecida en el artículo 168 del Código General del Proceso, que consagra que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso, y autoriza a su vez al juez para que rechace de plano las pruebas que estén prohibidas, o que sean ineficaces, es decir, que sólo puede aceptar aquéllas que sean conducentes, pertinentes y útiles.

3. Dicen Diego Armando Yañez Meza y Jeferson Arely Castellanos Castellanos<sup>1</sup>, que en el derecho a la prueba, se destacan dos consecuencias angulares: *“..primera, la justicia constitucional<sup>13</sup>, teniendo como fuente la Constitución, señaló que el derecho a la prueba "lleva inmerso la capacidad y prerrogativa a: (i) la proposición o requerimiento de la prueba; (ii) el pronunciamiento sobre su admisibilidad; (iii) a la inclusión en el proceso y, finalmente, (iv) a la valoración o apreciación de las mismas conforme a las reglas de la sana crítica"<sup>14</sup>. Segunda, ha*

---

<sup>1</sup> 2016. «El Derecho a La Prueba En Colombia: Aspectos Favorables Y críticos De La Reforma Del código General Del Proceso En El Derecho Sustancial Y Procesal». *Vniversitas* 65 (132):561-610. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj132>

<sup>13</sup> Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-171-06, 7 de marzo de 2006, expediente T-1226076, magistrada ponente Clara Inés Vargas-Hernández. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-171-06.htm>

<sup>14</sup> Corte Constitucional, Sala Plena, Auto A227-07, 29 de agosto de 2007, referencia: solicitud de nulidad de la Sentencia T-233 de 2007, proferida por la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy-Cabra. Expediente: T-1498919. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2007/a227-07.htm>. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-610-12, 1 de agosto de 2012, expediente D-8941, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas-Silva. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-610-12.htm>. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-555-99, 2 de agosto de 1999, expediente T-197404, magistrado ponente José Gregorio Hernández-

*referido que el derecho a la prueba encuentra unos límites ya que "(i) no permite o legitima la solicitud o el decreto de nuevas pruebas y (ii) que una vez satisfecho el derecho sustancial, consistente en allegar y valorar las pruebas... debe dársele trámite perentorio y urgente al proceso"<sup>15</sup>.*

Los aspectos que concitan la atención del Tribunal hacen relación con la capacidad y prerrogativa a la proposición o requerimiento de la prueba y el pronunciamiento sobre su admisibilidad, como se dijo en el texto traído como argumento de autoridad el problema jurídico queda delimitado en el primero de los momentos, que *“destaca la Corte Constitucional como contenido esencial del derecho a la prueba: la etapa o momento de la proposición o requerimiento de la prueba. De aquí la importancia de este ítem en cuanto a su cronología en el contexto del proceso, por ejemplo, el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la*

---

Galindo. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/t-555-99.htm>. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-589-99, 13 de agosto de 1999, expediente T-210000, magistrado ponente Eduardo Cifuentes-Muñoz. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/t-589-99.htm>. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-1276-05, 6 de diciembre de 2005, expediente T-1166403, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra-Porto. Disponible en: <http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/t-1276-05.htm>. Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-171-06, 7 de marzo de 2006, expediente T-1226076, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-171-06.htm>. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-077-09, 12 de febrero de 2009, expediente T-1842367, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. Disponible en: <http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-077-09.htm>

<sup>15</sup> Corte Constitucional, Sala Plena, Auto A227-07, 29 de agosto de 2007, referencia: solicitud de nulidad de la Sentencia T-233 de 2007, proferida por la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy-Cabra. Expediente: T-1498919. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2007/a227-07.htm>. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-610-12, 1 de agosto de 2012, expediente D-8941, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas-Silva. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-610-12.htm>. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-555-99, 2 de agosto de 1999, expediente T-197404, magistrado ponente José Gregorio Hernández-Galindo. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/t-555-99.htm>. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-589-99, 13 de agosto de 1999, expediente T-210000, magistrado ponente Eduardo Cifuentes-Muñoz. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/t-589-99.htm>. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-1276-05, 6 de diciembre de 2005, expediente T-1166403, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra-Porto. Disponible en: <http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/t-1276-05.htm>. Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-171-06, 7 de marzo de 2006, expediente T-1226076, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-171-06.htm>. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-077-09, 12 de febrero de 2009, expediente T-1842367, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. Disponible en: <http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-077-09.htm>

*prueba no es posible sin el debido agotamiento de la etapa de proposición o requerimiento de la prueba”.*

4. La Ley 1564 de 2012, estableció un nuevo modelo de régimen probatorio que propugna por la efectiva celeridad y economía procesal dentro del proceso oral, concentrando la etapa probatoria de maneras tal que solo sean decretadas aquellas pruebas que las partes estuvieron en imposibilidad de aportar de manera anticipada. *“...El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de un derecho de petición, hubiere podido conseguir la parte que lo solicite, salvo que la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditar sumariamente”.*, es el contenido del inciso 2º del artículo 173 del Código de General del Proceso,

5. Esa norma se complementa con el numeral 4º del artículo 43 de la misma codificación que señala como uno de los poderes de ordenación e instrucción de los operadores judiciales, exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no se le haya sido suministrada siempre que sea relevante para los fines del proceso.

Pero, era necesario, como en efecto se hizo, consagrar en el numeral 10º del artículo 78 del Código, en relación con los deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados: *“Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio de petición hubiere podido conseguir.*

6. Luego, el interesado tiene la carga probatoria de aportar, en su debida oportunidad, los documentos e informes que pueda obtener sin la mediación judicial y el juez a su vez tiene el deber de decretar y practicar sólo aquellas pruebas que las partes no se encuentran en la capacidad de presentar, bien sea porque *i)* no fue atendida la solicitud con la que se buscaba obtenerlas por parte de las autoridades o de los particulares, *ii)* no fue suministrada a tiempo o, *iii)* le fue negada.

7. En el caso concreto una vez Canaxia Labs S.A.S. propone excepciones de mérito surgía para Víctor Eduardo Mesa Londoño, en el término de traslado y atendiendo a sus intereses, la carga de formular derecho de petición ante la Dian y la Cámara de Comercio Local y al no hacerlo, acertado estuvo el *a quo* al negar el pedimento probatorio en la forma efectuada.

### III. DECISIÓN

Consecuente con lo expuesto, el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, RESUELVE: CONFIRMA** el auto de 14 de octubre último, proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de esta ciudad, que negó el decreto de algunas pruebas solicitadas por la parte actora.

### NOTIFIQUESE

**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO**  
**Magistrado**

**Firmado Por:**  
**Juan Carlos Sosa Londono**  
**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**  
**Sala 001 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **07ef32a3d98e9d9106488043cc02b41770395707caec99edd5d872f5ad42ee83**

Documento generado en 24/03/2023 02:40:35 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**